220-39476

Ref: Sociedades Extranjeras y sucursales.

Se recibió su comunicación radicada bajo el número 77875, mediante la cual solicita que se le precise si los conceptos emitidos mediante el oficio DSC 05877 de fecha ilegibles, relacionados con las sociedades extranjeras y sus sucursales, siguen vigentes.

Al respecto, sea lo primero observar que en gran parte las disposiciones jurídicas, señaladas en el oficio citado con excepción de unas pocas siguen vigentes y en esa medida también lo está la doctrina que en ellas se fundamenta.

1. Sociedades extranjeras y Sucursales de sociedades extranjeras:

En efecto, está vigente el artículo 469 del Código de Comercio, según el cual se entiende por sociedad extranjera, aquella constituida conforme **a la ley de otro país y con domicilio principal en el exterior y también** el artículo 497 ibídem, que hace aplicable a la situación de las sociedades extranjeras el régimen de las sociedades nacionales, lo que permite definir la sucursal extranjeras en los términos previstos en el artículo 263 ibídem, así: " Son sucursales los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad dentro o fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades para representar a la sociedad. ..."

En este sentido **sigue vigente el inciso y numeral 1º del artículo 471 del Código de Comercio**, que ordena a las sociedades extranjeras que proyectan desarrollar negocios permanentes en el país, establecer una sucursal con domicilio en el territorio nacional, mediante la protocolización en una notaría del lugar elegido como su domicilio en el país, de las copias auténticas del documento de su fundación, de sus estatutos, de la resolución o acto que acordó su establecimiento en Colombia y de los que acrediten la existencia de la sociedad y la personería de sus representantes. (artículo 472 del Código de comercio).

En punto a la resolución de incorporación y concretamente del capital asignado, es preciso observar que el mismo debe pagarse al momento de incorporar la sucursal al país y que por provenir de una persona jurídica del exterior, constituye una inversión extranjera, que debe registrarse ante el Banco de la República dentro de los tres meses siguientes contados a partir del reintegro de las divisas por conducto de un intermediario cambiario, so pena de incurrir en una infracción al Estatuto de Inversiones Internacionales. (Resolución 51 emanada del Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES, modificada por el Decreto 2080 del 18 de octubre de 2000).

A su vez, es preciso anotar que las sucursales de sociedades extranjeras se rigen en el país conforme a las disposiciones contenidas en el título VIII, del libro II del Código de Comercio, denominado " de las sociedades extranjeras" que consagra algunas de las obligaciones que adquieren por el hecho de su incorporación, así como la obligación de ceñirse en lo pertinente por las normas de la liquidación de las sociedades por acciones, sin perjuicio de que según el artículo 492 del Código de Comercio, puedan acceder a los procesos concursales o acogerse a la promoción de un acuerdo de reestructuración en los términos del artículo primero de la ley 550 de 1999.

Las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia, que no estén vigiladas por la Superintendencia Bancaria, **están sometidas a la vigilancia de esta Superintendencia de acuerdo con el artículo 470 del Código de Comercio, que también está vigente** y tienen las siguientes obligaciones:

1. Acreditar ante la Superintendencia respectiva que el capital asignado por la principal, ha sido cubierto (artículo 475 del Código de comercio);
2. Constituir las reservas y provisiones que la ley exige para las sociedades anónimas nacionales, (artículo 476 del Código de Comercio);
3. Llevar la contabilidad de los negocios que celebren en el país en libros registrados en la Cámara de Comercio de su domicilio, con sujeción a las leyes nacionales, (artículo 488 del Código de Comercio);
4. Enviar a la respectiva Superintendencia y a la Cámara de Comercio copia del balance general, por lo menos al final de cada año;

2. Permiso de funcionamiento.

Por su parte, **fue derogado el numeral 2º del artículo 471 del código de comercio** que establecía la obligación de que la sucursal incorporada obtuviera permiso de funcionamiento de la Superintendencia de Sociedades; al respecto, la Constitución Política, del año de 1991, dispuso en el artículo 333 que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Agrega la referida disposición que para su ejercicio, nadie podrá exigir **permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.**

Acorde con esta disposición, el Presidente de la República con fundamento en las atribuciones conferidas en el artículo 20 transitorio de la Constitución Nacional expidió el Decreto 2155 del 30 de diciembre de 1992 que al respecto en su artículo 3, previó lo siguiente: " **Autorizaciones Generales.-** En virtud de lo dispuesto en el Artículo 83 de la Constitución Política, de acuerdo con el principio de la presunción de buena fe en las actuaciones de los particulares, el Superintendente podrá expedir regímenes de autorizaciones generales para los trámites que deban surtirse ante la Superintendencia de Sociedades."

En este sentido, mediante Circular Externa Nº 001 del 3 de febrero de 1993, referente a la supresión de trámites, la Superintendencia de Sociedades estableció lo siguiente: "PERMISO DE FUNCIONAMIENTO en lo sucesivo las sociedades que queden sometidas a la vigilancia de esta entidad no requerirán permiso de funcionamiento de la misma para ejercer su objeto social, pero deberán informar a esta Superintendencia cuando queden incursas en alguna de las causales actualmente vigentes."

3. Atribuciones del Superintendente:

Dispuso el legislador que la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de la facultad de vigilancia tendría las funciones previstas en el artículo 84 de la ley 222 del 20 de diciembre de 1995; le atribuyó a su vez, otras funciones en el artículo 86, entre ellas la de **imponer sanciones, facultad que por tanto sigue vigente, hasta por un tope máximo de 200 salarios mínimos legales mensuales**, a quienes incumplan sus órdenes, las leyes o violen los estatutos.(artículo 86 numeral 3º, de la ley 222 de 1995). **No está vigente** la facultad de **suspender el permiso de funcionamiento**, en razón a la derogatoria de la facultad legal de otorgarlo; la de decretar la disolución y ordenar la liquidación, está prevista como una de las atribuciones que en vigilancia tiene el Superintendente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 84, numeral 5º, de la ley 222 de 1995.

Cabe observar que las **causales de vigilancia** previstas en el Decreto 2059 de 1981, así como las contenidas en la ley 44 del mismo año, fueron derogadas por el Decreto 1827 del 22 de julio de 1991 y por el Decreto 1258 del 30 de junio de 1993 expedido con fundamento en el numeral 1º del artículo 5º del Decreto 2155 del 30 de diciembre de 1992, por el cual se reestructuró la Superintendencia de Sociedades, en cuyo artículo segundo se dispuso lo siguiente: "Las sociedades que estuvieron sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades en virtud de alguna de las causales que operaron antes de la expedición del Decreto 1827 de 1991 y respeto de las cuales no se hubieren establecido posteriormente la ocurrencia de causales sobrevinientes que determinen la continuidad de dicha vigilancia, se entenderán no sometidas, salvo que ante dicha entidad se acredite la existencia de alguna de las causales previstas en este Decreto o en el numeral 2º del artículo 5º del Decreto 2155 de 1992. " .

De lo expresado se desprende que las sociedades en cuyo capital participen personas jurídicas extranjeras, sometidas a la vigilancia de la Superintendencia con fundamento primero en el artículo 10 de la ley 688 de 1967 que modificó el artículo 125 del Decreto Ley 444 de 1967 y posteriormente, en el artículo primero literal j) del decreto 2059 de 1981, salieron del control por virtud del Decreto 1258 del 30 de junio de 1993, a su vez derogado por el Decreto 3100 del 30 de diciembre de 1997, por el cual se establecen nuevas causales y se señalan otras entidades sujetas a vigilancia.